

RESOLUCION DE LA VICECONSEJERA DE COORDINACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN A LA ENTIDAD DIOCESIS DE CANARIAS, POR IMPORTE DE SETENTA Y CINCO MIL (75.000,00€) EUROS, DESTINADA A LOGISTICA Y GESTION DE MOVILIDAD BAJADA VIRGEN DEL PINO 2025.

Visto que con fecha **14 de octubre de 2025** se procedió por parte de **D. JORGE LUIS MARTIN DE LA COBA**, en calidad de representante de la entidad **DIOCESIS DE CANARIAS**, a solicitar del Vicepresidente del Gobierno la concesión de una subvención con destino a **LOGISTICA Y GESTION DE MOVILIDAD BAJADA VIRGEN DEL PINO 2025**.

Visto el Informe Propuesta favorable emitido por el Director General de Análisis y Estudios, con fecha **22 de octubre de 2025**, donde entre otras cuestiones se recoge que:

"Resultando que es de evidente interés público, ya que la Bajada de la Virgen del Pino constituye uno de los acontecimientos religiosos, culturales y sociales más relevantes de Canarias, celebrada entre los días 31 de mayo y 15 de junio de 2025, representa un evento de gran trascendencia histórica y patrimonial para la isla de Gran Canaria y, en general, para toda la Comunidad Autónoma de Canarias. La devoción a la Virgen del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias, se remonta al siglo XV, y su culto ha sido un elemento fundamental en la configuración de la identidad religiosa y cultural del pueblo canario. La Bajada de la Virgen, que se celebra bajo decreto del obispo diocesano, tiene un profundo arraigo en la población y constituye un punto de encuentro intergeneracional y de unidad social. Durante este acontecimiento, la imagen de la Virgen del Pino baja desde su basílica en Teror hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde es recibida con actos litúrgicos, culturales y populares, que atraen a miles de personas procedentes de toda Canarias y del exterior. La Bajada de la Virgen del Pino posee un carácter de interés público, dada su dimensión religiosa y patrimonial, su relevancia cultural y turística, su cohesión social y participación ciudadana, su impacto económico positivo, su promoción de la identidad canaria, etc. No se considera conveniente promover la concurrencia ya que la Diócesis de Canarias es la encargada de organizar todo lo concerniente a la Bajada de la Virgen del Pino, lo que justifica la concesión directa de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 21.1 b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria **06.0639.912E.4800200**, proyecto **19408911 "ACCIONES COMPLEMENTARIAS"**, de los Presupuestos del Departamento para el año 2025.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, así como la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Considerando que se le atribuye a la Viceconsejera de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia las competencias que corresponden al Vicepresidente del Gobierno en materia de subvenciones, según el Dispongo Primero de la Orden 4/2024, de 18 de marzo (B.O.C. n.º 70, de 9 de abril).

RESUELVO

Primero: Conceder a la entidad **DIOCESIS DE CANARIAS**, con cargo a la aplicación presupuestaria **06.0639.912E.4800200**, proyecto **19408911 "ACCIONES COMPLEMENTARIAS"**, de los Presupuestos del Departamento para el año 2025, una subvención por importe de **SETENTA Y CINCO MIL (75.000,00€) EUROS**, para **LOGISTICA Y GESTION DE MOVILIDAD BAJADA VIRGEN DEL PINO 2025**.



La cantidad subvencionada representa el 82,23% del coste de la actividad.

Segundo: Ordenar que la cuantía señalada se abone mediante pago único, previa justificación de haber realizado la actividad.

Tercero: El plazo para la realización de la actividad es desde el **1 de enero de 2025** hasta el **31 de octubre del mismo año**.

Cuarto: Con anterioridad al pago de la subvención el beneficiario deberá acreditar haber destinado el importe de la misma al fin para el que se concede, presentando una cuenta justificativa, y las facturas si lo solicitase así el órgano concedente, en los términos del artículo 25 del Decreto 36/2009, antes del **30 de noviembre de 2025**, que contendrá la siguiente documentación:

1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas: que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación de la anotación contable e impuesto soportado. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación o que se hace referencia en la letra anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibo de la empresa proveedora, firmado, sellado y con fecha.

c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.

Quinto: El beneficiario de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión.

b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquiera de las Administraciones, Entes Públicos, entidades privadas o particulares.

d) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente Público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares en el mismo destino.

f) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se hayan materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas o fondos públicos recibidos en concepto de subvención.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida por los órganos concedentes, por la entidad colaboradora, en su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económica-financiera de la Administración Pública



de la Comunidad Autónoma.

- h) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.
- i) Dar la adecuada publicidad a la financiación de la actividad con esta subvención en los términos del art. 12 del Decreto 36/2009.
- j) Conservar la documentación justificativa de la subvención, por un periodo de cuatro (4) años, contado desde la finalización del plazo de justificación.
- k) Aquellas otras obligaciones establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003.
- l) No podrá, en ningún caso, concertar la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada con las personas enumeradas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003.

Sexto: Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el órgano que lo haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
- b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
- c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
- d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

Séptimo: No será exigible el abono de la subvención o, en su caso, procederá al reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003.

Tal incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión supone:

En los supuestos a), e) y g) del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, así como en el de incumplimiento total de realizar la actividad y en la obligación de justificación de la misma, deberá reintegrar el total de la subvención concedida más el interés de demora.

En los supuestos de realización parcial de la actividad y de justificación parcial de la misma, deberá reintegrar la parte proporcional a la actividad no realizada o no justificada más el interés de demora.

En los supuestos d) y f), se valorará el grado de incumplimiento, resultando del mismo la cantidad a reintegrar más el interés de demora.

En todos los supuestos de reintegro, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

En cuanto al procedimiento de reintegro se estará a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Octavo: La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30/10/2012), prohíbe la realización de pagos en efectivo superiores a unos determinados importes, establecidos en el artículo 7 de la citada Ley. El límite para el pago en efectivo de facturas o documentos justificativos del gasto previsto en el artículo 35.1 del mencionado Decreto 36/2009, se establece por expediente, no por operación hasta 3.000 euros. Dentro de este límite no podrá existir ninguna operación que supere los 1.000 euros, sin perjuicio de que para el cálculo de estas cuantías se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.



Noveno: Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la subvención concedida y las sanciones a imponer, en su caso, se registrarán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo lo establecido en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Décimo: La efectividad de esta Resolución está supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Viceconsejería de la Presidencia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

**LA VICECONSEJERA DE COORDINACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES,
María Auxiliadora Pérez Díaz
(P.D. Orden 4/2024, de 18 de marzo, BOC nº 70, de 9 de abril)**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA AUXILIADORA PEREZ DIAZ - VICECONSEJERO/A	Fecha: 04/11/2025 - 10:01:14
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
RESOLUCION - Nº: 173 / 2025 - Tomo: 1 - Libro: 2630 - Fecha: 04/11/2025 10:19:28	Fecha: 04/11/2025 - 10:19:28
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_irlPee7blFygdFn8MKS883fOxDtCIse	 
El presente documento ha sido descargado el 04/11/2025 - 10:19:38	